



Es necesario negociar con el ELN para cerrar el ciclo de guerra

Décadas de conflicto interno han impedido la confrontación de ideas y el debate franco sobre los problemas nacionales. La previsible instalación de una mesa de diálogo con el ELN debe ser la oportunidad para sincerar al país. El reto, vencer la apatía de los ciudadanos ante los procesos de paz.

Daniel Alberto Libreros Caicedo,

Integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz Universidad Nacional de Colombia

Según los últimos hechos, parece estar cerca la instalación de una mesa de diálogo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla del ELN. Por un lado, está la liberación del ingeniero canadiense Jernoc Wobert y los pronunciamientos realizados por miembros del grupo insurgente sobre el interés de dar inicio a un proceso de negociación política. Por otro, la aceptación de esa posibilidad expresada por el Ejecutivo.

Se suma la propuesta del actual presidente de Uruguay, José Mujica, de ofrecer a su país como sitio en donde se desarrollen las conversaciones pacificadoras.

Los tiempos discordantes de las negociaciones con el ELN, en caso de concretarse el inicio de las mismas, obligan a la conformación de una mesa paralela a la que viene funcionando en La Habana. Las diferencias históricas igualmente lo exigen.

Mientras las Farc surgieron como una guerrilla de autodefensa campesina, que giró a una ideología comunista después de la eliminación de los líderes de las guerrillas liberales en los albores del Frente Nacional, el ELN apareció en el escenario nacional acompañando la apuesta guevarista de extender la revolución cubana.

En sus inicios, logró incorporar a su organización la figura emblemática de Camilo Torres, referente de un catolicismo radical que tuvo expresiones regionales y que cuestionó el compromiso orgánico de la jerarquía eclesiástica con las elites dominantes. Además, ha focalizado sus propuestas en la denuncia a la política minero-energética de los gobiernos bipartidistas.

Agenda social

La negociación con el ELN es necesaria para cerrar el ciclo de guerra que ya completa varias décadas en el país y, por ello, a pesar de las particularidades de cada negociación, las mesas deben trabajar en la perspectiva de acuerdos comunes. Temas como Comisión de Verdad, Justicia transicional, participación política de los insurgentes y la ratificación de los acuerdos, unifican las negociaciones.

Sin embargo, debe aceptarse que un tema tan relevante como el de la pacificación del país no está despertando en la ciudadanía el interés que merece. La ausencia de un gran movimiento político y social por la paz explica en gran medida esta apatía.



La dirección del ELN ha declarado que acompañará una posible propuesta de Asamblea Constituyente en la mesa de diálogos.

La fragmentación desafortunada de los partidos, los grupos sociales y la academia impiden que surja un movimiento de estas características, que defina una agenda social que abra un horizonte de transformación al actual estado de cosas, una agenda que vaya más allá de los puntos que discuten las partes en conflicto.

Lo más preocupante es que hay antecedentes regionales y esfuerzos nacionales que han venido involucrando a franjas importantes de la sociedad en esta perspectiva pacificadora y que ahora no pueden centralizarse en una propuesta colectiva.

A la fragmentación de la sociedad deben sumársele las condiciones en que se desarrolla la negociación de La Habana. El hecho de que a causa del calendario electoral haya quedado signada por la eventual reelección del presidente Santos, la hace aparecer como parte de una estrategia electoral gubernamental y, más allá de ello, la limita en sus alcances.

Más de lo mismo

El país vive una profunda crisis institucional y social; el desprestigio del Congreso y de los altos tribunales judiciales es cada vez mayor; los escándalos recurrentes de corrupción ofenden cotidianamente a los colombianos. El paro agrario confirmó la desesperanza de los habitantes de la Colombia

rural. El desempleo sigue siendo uno de los más altos de la región.

Sin embargo, el actual gobierno continúa con la rutina de los anteriores, profundizando el neoliberalismo e ilegalizando las protestas. Luego, el mensaje que se transmite a la ciudadanía es problemático. La invita a apoyar la negociación del conflicto para legitimar una apuesta política que en el futuro inmediato preservará el actual estado de cosas.

Por ello, para conseguir el movimiento por la paz que demanda la oportunidad histórica de terminar con el conflicto interno, es necesario asociarlo a la posibilidad de una transición posconflicto que transforme la institucionalidad en crisis y abra las posibilidades de un régimen político democrático. Este movimiento por la paz deberá lograr un acuerdo político amplio que involucre al Gobierno y al conjunto de los partidos, la Iglesia, los gremios económicos y las organizaciones sociales en la perspectiva de consensuar el instrumento y los contenidos de esta transición.

Obviamente, que este consenso reformativo no significa que se diluyan las fronteras ideológicas entre quienes lo pactan. Pues, no hay que descocer que las doctrinas partidarias se han vaciado tras décadas de guerra interna que han impedido la confrontación de ideas y el debate franco sobre los problemas nacionales en un escenario realmente democrático; crisis que se ha agudizado con la mercantili-

zación de la política, propia de los tiempos que vivimos, asociada al clientelismo secular. Por todo esto, la transición posconflicto deberá reinventar la política y cuestionar los fundamentos de un neoliberalismo cada vez más criticado.

La fórmula de la Asamblea Constituyente cumple con los requisitos del instrumento reformativo que exige la transición posconflicto. La dirección del ELN ha declarado que acompañará esta propuesta en la mesa de diálogos. El Gobierno, por el contrario, viene insistiendo en que este no puede ser el mecanismo para sellar la negociación y ha presentado al Congreso el proyecto de ley modificatorio de la norma, que reglamenta los mecanismos de participación ciudadana.

Así, pone a los colombianos en la perspectiva de convocar el referendo aprobatorio en las elecciones parlamentarias o en las presidenciales del año entrante. Del mismo modo, y cualquiera que sea la fecha y el mecanismo que se pacte para refrendar los acuerdos, debería incluirse la convocatoria con plazo definido de la Asamblea Constituyente, para abrir un periodo preparatorio de la misma con reglas de juego claras.

En definitiva, la Constituyente lo que persigue es una transformación de la sociedad y de la política, que va más allá de los acuerdos que se obtengan en las mesas de negociación.